

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-6676-2023
CARATULADO : GÁLVEZ/CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
DE CHILE (SUBDERE)

Santiago, veintinueve de Julio de dos mil veinticuatro

VISTOS:

A folio 1, comparecen los abogados Nicolás Alberto Leal Sepúlveda y Eduardo Armando García Ramos, en representación de: **(1) MARÍA ELENA GÁLVEZ VALDENEGRO**, pensionada, viuda; **(2) LUIS SERGIO FUENZALIDA GÁLVEZ**, independiente; y **(3) ANA MARÍA FUENZALIDA GÁLVEZ**, pensionada, todos con domicilio en Bandera 236 Subterráneo, comuna de Santiago, obrando a nombre propio y como herederos de **SERGIO DEL CORAZÓN DE JESÚS FUENZALIDA (Q.E.P.D.)**, en calidad de víctima indirecta y directa respectivamente, deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del FISCO DE CHILE, representado legalmente por Raúl Letelier Wartenberg, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, ambos con domicilio en Agustinas 1225, 4º Piso, comuna de Santiago, solicitando se condene al demandado al pago de las siguientes cantidades: **(a) \$200.000.000 a Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D.)**, por concepto de daño moral; y **(b) la suma de \$100.000.000 para cada una de los demandantes María Elena Gálvez Valdenegro, Luis Sergio y Ana María**, ambos **Fuenzalida Gálvez**, por repercusión o rebote; en su defecto, la suma que se considere en justicia, reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de interposición de la demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo periodo, y las costas de la causa.



Foja: 1

Señalan que Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D.), se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech II, bajo el número 3238.

Añaden que María Elena Gálvez Valdenegro es su viuda, Luis Sergio y Ana María, sus hijos, por lo tanto son sus herederos.

Respecto al testimonio de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D.), sostienen que dicha información fue extraída desde la Carpeta Confidencial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Al efecto, señalan que nació el 22 de Abril de 1924 y durante la dictadura se desempeñaba como comerciante y era militante del partido comunista de Chile. .

Señalan que en octubre de 1973 su domicilio fue allanado y consiguiente detenido por efectivos de la Marina; trasladado al Cuartel Silva Palma y puesto en libertad después de 15 días. Posteriormente, en agosto de 1976 fue detenido en la vía pública en Valparaíso, fue llevado a la Comisaría de Carabineros N°6 de la Región de Valparaíso; donde estuvo 5 a 6 de horas bajo detención.

Testimonio de María Elena Gálvez Valdenegro, nació el 09.06.1940, vive sola en Viña del Mar, y es dueña de casa. Se casó en enero de 1958 con Sergio del Corazón Fuenzalida Saavedra, y tuvieron 3 hijos en común.

Señala que su esposo pertenecía al partido Comunista de Chile, y en octubre de 1973 su esposo se entregó, debido a que a ella la habían detenido en varias ocasiones, con el fin de su esposo se entregara. Cuando se entregó, la invadió el terror, inquietud y miedo.

Durante la detención sufrió varios allanamientos, los cuales fueron presenciados por sus hijos, quienes quedaron traumatados por ello; en los allanamientos los militares andaban en el techo de la casa, alumbraban con linternas por las ventanas, ingresaban al hogar, golpeaban puertas y paredes,



Foja: 1

rompían y se robaban cosa; psicológicamente fue muy duro. Tuvo que contener a su esposo cuando fue puesto en libertad.

Posteriormente, en agosto de 1976 fue secuestrado por efectivos de Carabineros, le avisaron y fue a la Sexta Comisaría lugar donde permaneció hasta que lo dejaron en libertad.

Además, cuenta que sufrió persecuciones constantemente, por lo que debían cambiar de ruta todos los días para evitar que nos pasara algo, tuvo miedo mucho tiempo. Sufrió parálisis facial, ansiedad y estrés por todo el agobio que vivió.

Testimonio de Luis Sergio Fuenzalida Gálvez, señala que nació en Junio de 1960, en la actualidad vive en la comuna de Los Lagos donde se desempeña como profesor; señala que es hijo de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra detenido durante 15 días en el mes de octubre de 1973.

Cuenta que él y sus hermanos los repartieron por distintas casas de familiares y conocidos, ya que en su hogar corrían peligro por los allanamientos.

Recuerda allanamientos en que destrozaban y robaban todo lo que estaba a su paso, fueron años de mucha incertidumbre, tenía 13 años, era muy joven. Añade que cuando ingresó a 1° Medio, tuvo una entrevista a con un marino que estaba a cargo del colegio, quién le dijo textual “debes estar agradecido conmigo, porque tus padres tienen pésimos antecedentes”.

Posteriormente, en 4° Medio, una profesora comenzó a hablar en contra de la Unidad Popular, hablaba con mucho odio, ahí supo que tenía que agachar cabeza, cerrar la boca y no nombrar nada que hiciera referencia a su inclinación política. El negar tu identidad y al grupo que perteneces, te sientes discriminado.

Cuenta que vio un antes y un después, un quiebre permanente en su padre del que nunca se recuperó; tenía mucha rabia acumulada, se volvía muy agresivo, tuvieron varios enfrentamiento donde lo golpeaba, se descontrolaba, intentaba comprenderlo, imaginar por lo que había pasado. La relación con su



Foja: 1

padre se fragmentó, ninguno quedó igual a antes de los hechos, se acabaron navidades, cumpleaños, cambiaron muchas costumbres en la casa, se acabó tener las puertas abiertas relación con los vecinos no volvimos a tener, todo fue un cambio muy drástico.

Finaliza señalando que tiene 3 hijos, intentó no traspasar sus vivencias, su posición política nunca se las negó, pero no tenía la intención de que siguieran sus pasos. Inconscientemente fue muy estricto e intransigente, está seguro que esto dejó huellas en sus hijos.

Testimonio de Ana María Fuenzalida Gálvez, nació en Julio de 1957, en la actualidad vive en la comuna de Santiago, señala que es hija de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra.

Expresa que para la detención de su padre, tenía 16 años y a su hermano lo habían mandado a Quillota, en casa me quedaba con unos familiares que cuidaban a una persona postrada.

Recuerda que a su mamá la tomaron detenida y por ello su papá se entregó; también recuerda dos allanamientos muy violentos, donde les quemaron libros, robaron mercadería y destruyeron lo que encontraban a su paso, les apuntaban con armas.

Después que dejaron libre a su papá, fue todo muy triste; por otro lado, la situación vivida gatilló en su padre ataques de ira, se volvía muy violento.

Añade que postuló a la Universidad, no quería quedarse ahí, se fue a Punta Arenas, estando tan lejos se volvió todo más difícil para su padre y familia, luego de dos años volvió y comenzó a estudiar en la Universidad de Chile, estando en Santiago su familia la iba a ver cada cierto tiempo. A los 2 años volvió a dejar su segunda carrera a medias y en 1980 dio la prueba e ingresó a la Universidad Católica de Valparaíso, estuvo cerca de un año, y la dejó. En 1981 se casó y tuvo 3 hijos, tampoco encajó y se terminó separando.

Cuenta que tiene tengo problemas de sueño, duerme asustada, cree que sus hijos tienen secuelas también, puesto que reconoce que siempre ha sido



Foja: 1

muy gritona y nunca estuvo expuesta a ninguna persona, menos a un psicólogo o psiquiatra por miedo al que pensarán de ella.

Como fundamentos jurídicos de su pretensión invocan tratados internacionales; la Constitución Política; señala que estamos en presencia de un crimen de lesa humanidad por lo que es improcedente aplicar las normas y principios del derecho privado; además se expone sobre la imprescriptibilidad de la acción; cita jurisprudencia; y finaliza señalando los elementos de la responsabilidad que demanda.

A folio 10, rola el acta de la notificación de la demanda practicada de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, el 14 de junio de 2023.

A folio 12, compareció el Fisco de Chile, representado por la Abogada Procuradora Fiscal (S) de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, evacuando la contestación de la demanda, señalando como cuestión preliminar, que los demandantes María Elena Gálvez Valdenegro, Luis Sergio Fuenzalida Gálvez y Ana María Fuenzalida Gálvez, han presentado también demanda de indemnización de perjuicios por los daños directos sufridos por María Elena Gálvez Valdenegro en su calidad de víctima reconocida en Informe Valech, la que se tramita bajo el rol C-14431-2022 del 17° Juzgado Civil de Santiago.

En dichos autos, Luis Sergio Fuenzalida Gálvez y Ana María Fuenzalida Gálvez también demandan indemnización de perjuicios como víctimas por repercusión o rebote; sin que hayan sido reconocidos como víctimas de violaciones a los derechos humanos, por parte de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (“Comisión Valech”).

Además, alega las siguientes excepciones y/o defensas:

1.- Controversia de los hechos; tanto en la forma en que ocurrieron, como en cuanto a su existencia, naturaleza, monto y relación de causalidad de los perjuicios cuya indemnización se reclama.



Foja: 1

2.- Improcedencia de la demanda por intransmisibilidad del daño moral demandado; alega la imposibilidad de la cónyuge e hijos de una víctima fallecida para demandar los perjuicio, en calidad de herederos, respecto de su padre fallecido, como sucesores en los derechos patrimoniales de su respectivo causante, en este caso la indemnización del daño moral sufrido por su padre en relación con su detención, siendo él la víctima directa de los daño, por cuanto la acción para reclamar el daño moral es personalísima, por tanto, intransmisibile, lo que deviene en falta de legitimación activa a su respecto..

3.- Improcedencia de la demanda de una persona fallecida; por cuanto la capacidad procesal se extingue con la muerte de la persona.

4.- En cuanto los actores que señalan que comparecen por sí, alega excepción de falta de legitimación activa respecto de la cónyuge e hijos de la víctima directa; en tanto los demandantes no figuran como víctima de prisión política y tortura, por estos hechos, en ninguno de los informes emitidos por la Comisión Valech, en diciembre de 2004, julio de 2005 ni agosto de 2011. Destaca eso sí que la demandante María Elena Gálvez Valdenegro figura como víctima de prisión política y tortura, en Informe Valech 2, con el N° 3.354, sin embargo, este reconocimiento se refiere a otros hechos vividos por ella y no por su cónyuge.

5.- En subsidio, improcedencia de la indemnización dineraria demandada por la cónyuge e hijos, por limitación de la justicia transicional. Además de haber sido reparados en la forma que se expresará; sostiene, en síntesis, que la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los parientes, siendo titulares de la acción de reparación únicamente aquellos afectados directamente por el daño. Sin perjuicio de lo anterior, los demandantes han obtenido igualmente otras formas de reparación satisfactiva.

6.- En subsidio, excepción de prescripción extintiva, sostiene que aun cuando se considerase que la prescripción estuvo suspendida durante el



Foja: 1

período de la dictadura militar, a la fecha de notificación de la demanda de autos, igualmente han transcurrido en exceso los plazos de prescripción extintiva de 4 y 5 años que establecen los citados artículos 2332 y 2515 ambos del Código Civil. Agregando, que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre una declaración expresa, que en el caso de autos no existe.

7.- En cuanto al daño e indemnización pretendida,

a) Consideraciones en cuanto al daño pretendido por la cónyuge e hijos de la víctima Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida (Q.E.P.D.): señala que no existiendo una relación de causalidad entre los episodios de prisión y torturas experimentados por el causante y los perjuicios pretendidos por los actores, la demanda interpuesta a su respecto no podría prosperar.

Por otro lado, sostiene que los actores Luis Sergio Fuenzalida Gálvez y Ana María Fuenzalida Gálvez también demandan indemnización de perjuicios como víctimas por repercusión o rebote respecto de su madre en la causa que se tramita bajo el rol C-14431-2022 del 17° Juzgado Civil de Santiago, es decir, estos actores han deducido 2 demandas por separado, respecto de los daños por repercusión por la detención y tortura sufridas por su madre y en la presente, por los daños sufridos por su padre.

Por su parte, María Elena Gálvez Valdenegro ha deducido demanda respecto de los daños sufridos por la detención y tortura sufridas por sí misma y en la presente, por los daños sufridos por su cónyuge.

Manifiesta que en el eventual caso de acogerse la pretensión de los demandantes, estableciendo una indemnización a su respecto, ésta no podría ser el mismo monto que para una víctima directa de prisión y tortura. Los perjuicios sufridos por las víctimas directas, del cual dieron cuenta ante la Comisión Valech, supusieron importantes dolores físicos con eventuales consecuencias posteriores, mismos que no pueden considerarse del mismo modo que el resto de su grupo familiar, quien no sufrió directamente tales graves violaciones a sus Derechos Humanos, en tanto no sufrieron ni prisión ni torturas.



Foja: 1

8.- En subsidio, sostiene que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales;

9.- Por último, alega la improcedencia del cobro de reajustes e intereses, expresando que en el hipotético caso de que se acoja la acción de autos y condene al Fisco al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su parte incurra en mora.

A folio 16, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, ratificando los fundamentos de hecho y derecho invocados en el libelo indemnizatorio, controvirtiendo y solicitando el rechazo de las excepciones y/o defensas opuestas por el Fisco de Chile.

A folio 20, el Fisco evacuó el trámite de la dúplica, reiterando las argumentaciones expuestas en su contestación de la demanda, insistiendo en sus excepciones de fondo.

A folio 21, se recibió la causa a prueba.

A folio 46, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: A folio 1 comparecen los abogados Nicolás Alberto Leal Sepúlveda y Eduardo Armando García Ramos, en representación de: **(1) MARÍA ELENA GÁLVEZ VALDENEGRO**, pensionada, viuda; **(2) LUIS SERGIO FUENZALIDA GÁLVEZ**, independiente; y **(3) ANA MARÍA FUENZALIDA GÁLVEZ**, pensionada, obrando a nombre propio y como herederos de **SERGIO DEL CORAZÓN DE JESÚS FUENZALIDA (Q.E.P.D)**, en calidad de víctima indirecta y directa respectivamente, deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, solicitando se condene al demandado al pago de las siguientes cantidades: **(a) \$200.000.000 a Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D.)**, por concepto de daño moral; y **(b) la suma de \$100.000.000 para cada una de los demandantes María Elena Gálvez Valdenegro, Luis Sergio**



Foja: 1

y **Ana María**, ambos **Fuenzalida Gálvez**, por repercusión o rebote; en su defecto, la suma que se considere en justicia, reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de interposición de la demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo periodo, y las costas de la causa.

SEGUNDO: Que notificada en forma legal la demanda, fue contestada conforme las alegaciones y defensas reseñadas en la parte expositiva, mismas que las partes replicaron y duplicaron oportunamente.

TERCERO: Con el objeto de acreditar sus dichos, la parte demandante rindió prueba consistente en:

Instrumental:

A folio 1:

1.- Copia Digital de Nómina de casos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, Comisión. Valech II, donde figura Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D.) bajo el N° 3238.

2.- Copia digital timbrada de carpeta confidencial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra.

3.- Copia digital de Certificado de defunción de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra.

4.- Copia digital de Certificado de matrimonio, entre de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra y María Elena Gálvez Valdenegro.

5.- Copia digital de Certificado de nacimiento de Luis Sergio Fuenzalida Gálvez.

6.- Copia digital de Certificado de nacimiento de Ana María Fuenzalida Gálvez.

A folio 24:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FCXXXPLUENB

Foja: 1

7.- Fallo de casación en Episodio “Comando Conjunto, víctimas: Salinas, Pacheco y Gianelli. Rol N° 5831-2013.

8.- Fallo de casación en Episodio “Torres de San Borja”, víctimas: Montecinos Slaughter, Adler Zulueta, Díaz Agüero, y otros. Rol N° 2918-2013.

9.- Fallo causa “Marcone con Fisco de Chile”, Rol 22856-2015, de fecha 29 de Diciembre de 2015.

10.- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, Rol CDH-2-2017.

11.- Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 1092-15, dictada el día 14 de septiembre de 2015.

12.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Reflexiones y Propuestas de S.E. el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar; págs. 5 a la 10, inclusive.

13.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V.

14.-Copia digital de Estudio sobre Transgeneracionalidad del daño, elaborado por el Psicólogo don Freddy Silva Gallardo, coordinador de equipo especializado de PRAIS, Servicio de Salud Aconcagua, de fecha 16 de Octubre del 2017.

15.- Copia de la página N°64, del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, en el que figura SERGIO DEL CORAZÓN DE JESÚS FUENZALIDA SAAVEDRA, en el Registro de Torturados bajo el N°3238.

A folio 26:

16.- Informe del Programa de Asistencia Integral de Salud, PRAIS, del Ministerio de Salud, denominado **Norma técnica** para la atención de salud de



Foja: 1

personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990.

17.- Copia digital timbrada de carpeta confidencial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) correspondiente a Sergio Del Corazón De Jesús Fuenzalida (Q.E.P.D).

18.- Informe psicológico de daños respecto de Ana María Fuenzalida Gálvez.

19.- Informe psicológico de daños respecto de María Elena Gálvez Valdenegro.

20.- Informe psicológico de daños respecto de Luis Sergio Fuenzalida Gálvez.

21.- Copia digital de certificado de título de psicólogo de Felipe Ignacio Elgueta Casanova.

Testimonial:

A folio 41: Consta la declaración del testigo **Felipe Ignacio Elgueta Casanova**, psicólogo, quien legalmente juramentado y sin tacha, ratificó la autoría de los informes psicológicos de daños acompañados a folio 26.

CUARTO: A su turno la parte demandada solicitó, en el primer otrosi de folio 12 se oficiara al Instituto de Previsión Social para informe sobre los montos percibidos por Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida (Q.E.P.D), cédula nacional de identidad número 1.811.750-9, y María Elena Gálvez Valdenegro, cédula nacional de identidad número 4.408.470-8, en relación a las leyes 19.123, 19.234, 19.992 y 20.874.

A folio 34 y 35, se agregó el oficio del Instituto de Previsión Social, emitido con fecha 22 de enero de 2024, informado los beneficios recibidos por María Elena Gálvez Valdenegro, cédula de identidad 4.408.470-8, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura, en virtud de las Leyes 19.992, 20.405 y 20.874, esto es: **(a)** la suma de \$28.840.967 y \$21983.974, por concepto de pensiones; **(b)** la suma de \$1.600.000, como aporte único; **(c)** la



Foja: 1

suma de \$447.406, por concepto de aguinaldos. Asimismo, percibe dos pensiones mensuales una de \$263.264 y otra de \$201.677 (viudez). **(Total: \$52.872.347)**

QUINTO: Que, son hechos que constan en la causa por no haber sido objeto de controversia, más aún se encuentran acreditados con el mérito de los documentos reseñados en los motivos anteriores, especialmente la carpeta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), certificados de defunción, matrimonio, nacimiento y acompañados a folio 1, y el oficio evacuado por el Instituto de Previsión Social agregado a folio 34, los siguientes:

1.- Que Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra, cédula de identidad 1.811.750-9, comerciante, militante del partido comunista, fallecido el 10 de agosto de 1989, fue reconocido de manera póstuma como víctima de Prisión Política y Tortura por la Comisión Valech II, individualizado bajo el N° 3238, con posterioridad a marzo de 2010; por lo que no percibió beneficios por aplicación de las Leyes de reparación.

Estuvo detenido en dos oportunidades: (a) en octubre de 1973, por 15 días en el Cuartel Silva Palma / Academia de Guerra, lugares donde fue interrogado, brutalmente torturado, mediante golpizas brutales, se le aplicó corriente inclusive, fue presionado psicológicamente bajo amenazas de dañar a su esposa e hijos; y (b) en agosto de 1976, por un día, donde fue interrogado en la 6ta Comisaría de Valparaíso.

2.- Que María Elena Gálvez Valdenegro, cédula de identidad 4.408.470-8, está reconocida como víctima de prisión política y tortura, desconociéndose los antecedentes de su detención. No obstante lo anterior del oficio del Instituto de Previsión Social allegado a folio 34, consta que su condición de víctima de la represión política ejercida por agentes del Estado ha recibido por aplicación de las Leyes 19.992 y 20.874, los siguientes montos: **(a)** la suma de \$28.840.967; **(b)** la suma de \$1.600.000, como aporte único; **(c)** la suma de \$447.406, por concepto de aguinaldos. Asimismo, percibe dos pensiones mensuales una de \$263.264.



Foja: 1

Asimismo, por aplicación de la Ley 20.405 percibe una pensión de viudez de \$201.677; y además ha percibido por este mismo concepto la cantidad \$21.983.974.

3.- Que María Elena Gálvez Valdenegro, cédula de identidad 4.408.470-8, y Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra, cédula de identidad 1.811.750-9, contrajeron matrimonio el 14 de enero de 1958, a las 09:00 hrs.

4.- Que Luis Sergio Fuenzalida Gálvez, cédula de identidad 7.586.443-4, es hijo de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra y María Elena Gálvez Valdenegro.

5.- Que Ana María Fuenzalida Gálvez, cédula de identidad 7.596.521-4, es hijo de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra y María Elena Gálvez Valdenegro.

SEXTO: Que, resulta necesario y oportuno dejar consignado que el 11 de noviembre de 2003, transcurridos 13 años desde que se restableció el Estado de Derecho en nuestro país, durante el gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile”, cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios considerados válidos (se recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se dejó constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.



Foja: 1

SEPTIMO: Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que “Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica”, cuyo artículo primero, contenido en el Título I “De la pensión de reparación y bono”, dispone: *“Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de Prisioneros Políticos y Torturados”, de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.”*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a \$1.480.284.- para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a \$ 1.549.422.- para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, preceptúa que la referida pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de \$ 3.000.000.-, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.

El artículo séptimo, dispone que tanto la pensión como el bono se devengarán a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios presenten sus solicitudes, mismas que podrían impetrarse desde la publicación de la Ley.

OCTAVO: Que, por otro lado, mediante la Ley N° 20.874, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que “Otorga un aporte único, de carácter



Foja: 1

reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile”, de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000.-, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

Por su parte el inciso tercero, señala: *“Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.”*

NOVENO: Que hecho los alcances anteriores, como primera cuestión es menester revisar la defensa Fiscal relativa a la improcedencia de la demanda por intransmisibilidad del daño moral demandado por los herederos de **Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D)**, quien falleció el 10 de agosto de 1989, y de forma póstuma fue reconocido como víctima de prisión política y tortura por la Comisión Valech II, lo que lleva a establecer que falleció sin ser beneficiario de la leyes de reparación.

Al respecto, se encuentra acreditado en estos autos que **Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D)**, detenta la calidad de Prisionero Político y Torturado, por lo que es del todo plausible presumir que la detención y vejámenes que padeció, se debieron al hecho de sus convicciones políticas y sociales, como militante del partido comunista, como se señala en la demanda; y que siendo dichas circunstancias las que motivaron su detención y posteriores torturas, físicas y psicológicas por agentes del Estado, estas debieron necesariamente afectar su estado físico y emocional, de manera inmediata y durante el período que estuvo detenido, como también en los tiempos futuros hasta el día de su muerte.



Foja: 1

Por otro lado, se debe tener presente que comparecen como demandantes María Elena Gálvez Valdenegro; y Luis Sergio y Ana María, ambos Fuenzalida Gálvez, en sus calidades de herederos (viuda e hijos respectivamente), demandando al Fisco de Chile, para que este sea condenado a pagarles la suma de \$200.000.000 por el daño moral directo experimentado por Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D), en su calidad de víctima de represión política.

Así las cosas, la controversia se circunscribe a esclarecer si los herederos del causante pueden ejercer la acción por daño moral que originalmente correspondía a aquel, de manera de obtener la reparación del perjuicio extrapatrimonial sufrido por la víctima directa.

Que determinado el sustrato fáctico en discusión, se hace presente que este tribunal adhiere a la teoría de la intrasmisibilidad del daño moral, por tratarse de un bien o derecho que es inherente a su titular; por consiguiente, lo mismo ocurre con la acción para reclamarlo, pues ambos tienen el carácter de personalísimos, esto es, están intrínsecamente ligados a la persona de su titular que no pueden sufrir un cambio de sujeto, toda vez que, lo que se persigue es compensar el mal soportado por la víctima personalmente.

La doctrina de la intrasmisibilidad del daño moral y su acción, además ha tenido amplia acogida jurisprudencial, así por ejemplo se ha manifestado nuestro máximo tribunal en la causa Rol 2073-2009 C.S.

En conclusión, la demanda por el daño moral directo sufrido por Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D), deducida por María Elena Gálvez Valdenegro, Luis Sergio y Ana María, ambos Fuenzalida Gálvez, en sus calidades de herederos del causante, no podrá prosperar, pues el daño moral y su acción para reclamarlo tienen el carácter personalísimos, ergo, son intransmisibles, de lo que se colige que su viuda e hijos carecen de la titularidad y/o legitimación necesaria para reclamarlo.

DECIMO: Que también el Fisco cuestionó la legitimación de María Elena Gálvez Valdenegro, Luis Sergio y Ana María, ambos Fuenzalida



Foja: 1

Gálvez, en cuanto comparecen demandado, por sí, daño moral por repercusión o rebote experimentado por los apremios ilegítimos sufridos por Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D), en su calidad de víctima de violación a derechos fundamentales.

En relación a la legitimación activa, se sostiene que toda acción en que se reclama o se hace valer un derecho debe ser intentada por el titular del mismo y contra la persona obligada. Ahora bien, corresponde al actor la prueba del correcto ejercicio de la acción que pretende hacer valer y, por lo tanto, le incumbe demostrar su calidad de titular del derecho que invoca. La falta de esta calidad, que se produce cuando no existe identidad entre la persona del compareciente y aquella a quien legalmente la acción está concedida, determina la procedencia de la defensa esgrimida fundada en la falta de legitimidad activa.

En este sentido, la falta de legitimidad activa se produce cuando no existe identidad entre la persona del compareciente y aquella a quien legalmente la acción está concedida, debiendo en tal caso rechazarse la demanda, no por que esta haya sido mal deducida, sino porque esta no corresponde al actor.

Que en el caso de autos, a juicio de esta magistratura existe un legítimo interés de los actores en cuanto a demandar el daño moral personal que alegan haber experimentado por la detención ilegal y apremios ilegítimos a los que fue sometido Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D), lo que lleva a este Tribunal a desestimar la excepción en análisis.

En nada altera lo que se viene concluyendo, el hecho que María Elena Gálvez Valdenegro se encuentre reconocida como víctima de prisión política y tortura, pues dicha circunstancia no obsta a que ella accione por los derechos subjetivos que siente lesionados en su calidad de viuda de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D) quién también fue víctima directa de vejámenes por agentes del Estado, resultando palmaria su titularidad e interés en el ejercicio de la acción enderezada.



Foja: 1

La misma razón debe aplicarse para Luis Sergio y Ana María, ambos Fuenzalida Gálvez, en su calidad de hijos, pues el hecho de que no estén reconocidos como víctimas directas, en nada no impide el ejercicio de la acción indemnizatoria que han enderezado en estos autos.

UNDECIMO: Seguidamente toca analizar las demás defensas del Fisco, además alegó la improcedencia de la indemnización demandada por limitación de la justicia transicional, fundada en que, en la especie, existiría un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los parientes, siendo titulares de la acción de reparación únicamente aquellos afectados directamente por el daño.

Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que los demandantes han obtenido otras formas de reparación satisfactiva, tales como construcciones de memoriales, el museo de la memoria, entre otros, que han compensado los daños causados por los agentes del Estado, por lo que no pueden ser exigidos nuevamente, por haber sido ya indemnizada la parte demandante.

Sobre el particular, este sentenciador considera que si bien el Estado de Chile ha realizado actuaciones tendientes a reparar el daño causado por sus agentes a víctimas directas o por repercusión de delitos de lesa humanidad, tales circunstancias no son obstáculo o impedimento para que quienes se sientan afectados interpongan las correspondientes acciones indemnizatorias en sede judicial, como ocurre en el caso de autos; pues no es efectivo que en materia de violación a los derechos humanos relativas a los informes emanados por las Comisiones Valech I y II, por Prisión Política y Tortura, se haya excluido a los familiares de las víctimas directas de los vejámenes con la intención de que estos no puedan enderezar acción indemnizatoria alguna, pues si bien los familiares no están incluidos en las nóminas elaboradas por dichas Comisiones, ello no implicó a priori una exclusión tendiente a impedir el ejercicio de acciones jurisdiccionales; circunstancias que conducen a que dicha defensa no pueda prosperar.

Por lo demás, la situación que afectó a los demandantes está dentro de lo que la teoría del derecho de daños estima procedente, en orden a reparar el



Foja: 1

daño causado y nada más que el daño, centrando la función primordial de la reparación en la víctima, sin importar si se trata de una víctima directa o por repercusión. Así, si el Estado es culpable por los atentados a la dignidad humana, la responsabilidad civil se concretiza en la teoría de daños, cuya función esencial es su reparación, efecto que a su vez se radica en el patrimonio del Estado quien tiene el deber de repararlo, entre otras formas, por indemnizaciones pecuniarias.

En tal sentido, está acreditado que los demandantes son la viuda e hijos del prisionero político y torturado de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D), y que vivían todos en el mismo hogar común cuando se produjo la detención ilegal de este último, quién además fue torturado y vejado en su dignidad humana para luego ser liberado y volver a su entorno familiar.

Al respecto, es dable sostener que tanto su viuda como sus hijos también experimentaron perjuicios por la vulneración de derechos que afectó a su familiar. Así las cosas, el daño que reclaman los actores se enmarca dentro del denominado daño moral y la indemnización solicitada es una manera de abordar la reparación, pues no se pueden borrar los hechos, configurándose así la obligación de otorgar una indemnización pecuniaria que compense el daño causado que no ha sido íntegramente reparado.

Por lo considerado, la excepción de pago y/o reparación integral opuesta por el Fisco será desestimada.

DUODECIMO: El Fisco también opuso la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria, fundada en los argumentos ya explicitados con anterioridad en el presente fallo.

Al respecto sólo caber tener especialmente presente que del tenor literal del Artículo 5° de nuestra Carta Fundamental, fluye que el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y también, se realiza por las autoridades que la misma Constitución establece; y que dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de



Foja: 1

la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Por consiguiente, a través de dicha disposición constitucional, se incorporan al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, entre las que destaca el deber de indemnizar o reparar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; adquiriendo rango constitucional.

En estricta relación la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, ha señalado al respecto que, *“tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instauro el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.*

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el



Foja: 1

empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado.”

En conclusión, según lo expresado precedentemente, las excepciones de prescripción principal y subsidiaria serán desestimadas, por encontrar ambas su fundamento en normas de derecho interno, preceptos que, como ha quedado claramente explicitado en el presente fallo, no son aplicables al caso de autos.

El argumento anterior, además ha sido reiterado en un fallo de fecha **6 de junio de 2023**, que señala en su considerando “...**Octavo:** *Que, en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno. En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las*



Foja: 1

responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado". "Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado". C.S Rol N° 130.949-2020.

DECIMO TERCERO: Que, habiéndose desestimado las excepciones de limitación de la justicia transicional, reparación integral y de prescripción de la acción civil, toca pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización pretendida por María Elena Gálvez Valdenegro, Luis Sergio y Ana María, ambos Fuenzalida Gálvez, en cuanto comparecen demandado, por sí, el daño moral por repercusión experimentado por los apremios ilegítimos sufridos por Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D), en su calidad de víctima directa de violación a derechos fundamentales.

Que respecto de María Elena Gálvez Valdenegro, como se ha venido expresando se encuentra acreditado que se encontraba casada con Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D), en la época en que éste fue detenido ilegalmente y torturado por agentes del Estado, por lo que es del todo plausible sostener que la detención, tortura y vejámenes que sufrió su cónyuge, debieron necesariamente afectar su estado emocional, de manera inmediata, durante todo el período que estuvo detenido, como así también en los tiempos futuros.

Por su parte, también está acreditado que Luis Sergio y Ana María, ambos Fuenzalida Gálvez, son hijos de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D), por lo que del mismo modo, es dable considerar que la detención ilegal, torturas y vejámenes que sufrió su padre, debieron necesariamente afectarles emocionalmente, tanto en lo inmediato como durante el período que estuvo privado de libertad, así también en los tiempos posteriores.

Además de lo expresado, con el mérito de los informes psicológicos de daños acompañados a folio 26, es factible establecer una presunción grave, precisa y concordante en cuanto a que los actores, familiares directos, cónyuge



Foja: 1

e hijos, que vivenciaron personalmente situaciones violentas que afectaron a un íntegramente de su grupo familiar, sufran una grave incertidumbre y angustia al desconocer su paradero, sentimientos que naturalmente debieron dejaron marcas permanentes en ellos; asimismo, el hecho de convivir o estar expuestos a las nefastas consecuencias o secuelas que las torturas dejaron en su familiar, es normal que sufrieran aflicción, pena o dolor, mismos que deben ser reparados, por cuanto es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como son la integridad física y psíquica, no siendo tolerable bajo ningún respecto que sus agentes hayan lesionado los derechos fundamentales de un miembro de la familia de los demandantes, hechos por lo que el Estado debe responder.

DECIMO CUARTO: Así las cosas, los daños experimentados por los actores sólo se pueden enmarcar dentro del denominado “daño moral”, por lo que resulta plausible entonces acoger la demanda, y tal circunstancia conlleva a determinar el monto de los perjuicios que las víctimas indirectas de violaciones a los Derechos Humanos sufrieron en el régimen militar.

Ello es una cuestión de ponderación y valoración que se le impone al tribunal, con el objeto de establecer y precisar el menoscabo y la aflicción sufrida, mismos que no solo son posibles de presumir fundadamente, sino también por el principio de normalidad de las cosas, que indica que familiares directos que han presenciado y vivenciado las consecuencias y los traumas de los apremios ilegítimos y torturas en la persona de su cónyuge o padre respectivamente, por agentes del Estado, sufren daños que debe ser reparados.

DECIMO QUINTO: Que en esta labor de determinación del quantum indemnizatorio, este sentenciador necesariamente debe hacer una distinción respecto de los actores, por una lado, la viuda María Elena Gálvez Valdenegro, y por otro, los hijos Luis Sergio y Ana María, ambos Fuenzalida Gálvez, en base a las consideraciones que a continuación se exponen.

En cuanto a los hijos **Luis Sergio y Ana María**, este sentenciador tendrá especialmente presente que ellos no han sido beneficiarios de sumas de dinero alguna por aplicación de las leyes de reparación, por lo que para



Foja: 1

determinar el quantum de la indemnización se considerará principalmente el monto fijado por la Il. Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° 14.278-2019, que incide en la causa Rol 42035-2018, de este Tribunal, que en una situación fáctica análoga el tribunal de grado reguló la indemnización por daño moral en la suma de **\$10.000.000**; por lo que dicha cantidad será la indemnización que se determinará para cada uno de los demandantes señalados en este párrafo.

DECIMO SEXTO: Por otro lado y en cuanto a la actora María Elena Gálvez Valdenegro, sin perjuicio de que se viene desestimando la excepción de reparación integral y/o satisfactoria, este sentenciador es del parecer de considerar en la indemnización final, el monto percibido por la actora al amparo de la Ley 20.405, que le otorgó una pensión de viudez, por ser la cónyuge de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D), reconocido como prisionero político por la Comisión Valech II, teniendo presente para ello la naturaleza de dicha prestación otorgada por el Estado en este tipo de materias.

En este escenario María Elena Gálvez Valdenegro ha percibido sólo por a título de pensión de viudez un total de \$21.983.974, y además percibe en la actualidad una pensión mensual de \$201.677.

En efecto, el hecho dañoso que motivó la dictación de las leyes de reparación, a saber la ley 19.992, 20.405 y 20. 874, entre otras, fue el hecho ilícito del actuar de los agentes del Estado hacia víctimas que sufrieron persecución política, según quedó así recogido en el Informe Valech. Enseguida, debe tenerse especial atención que el hecho ilícito es la causa adecuada del beneficio y del daño, es decir, que tanto el beneficio como el daño provienen del mismo hecho ilícito.

En este aspecto, las leyes de reparación fueron una reacción positiva del Estado tendientes a reparar el daño causado, lo que en ningún caso inhibe o coarta el derecho a que las personas que se sienten perjudicadas o insatisfechas accionen y soliciten la reparación integral del daño en todo aquello que estiman no ha sido .



Foja: 1

A mayor abundamiento, tanto las leyes de reparación como las indemnizaciones otorgadas por los tribunales cumplen una función reparadora de daños, que emana de la misma naturaleza, cual es el daño moral, siendo ambas compatibles y complementarias.

Así las cosas, la regla de la *Compensatio lucri cum damno* es un principio de imputación de daños, dentro de la teoría del derecho de daños y la reparación integral, por lo que emanando el mismo daño del actuar ilícito de los agentes del Estado, teniendo además la misma naturaleza cual es la reparación del daño moral por ser víctimas de la Responsabilidad del Estado, el monto ya referido y otorgado estos años debe ser considerado en la suma final a recibir por parte de las víctimas, tal como en el mismo sentido lo resolvió la Sentencia Ingreso Corte 1763-2020, de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, regla que puede ser aplicada de oficio, pues tiene relación con la evaluación del monto del daño y no con la compensación de una obligación con otra, cuyo no es el caso, por lo que tal como lo sostiene Luis Diez Picasso es mejor hablar de imputación o computación de beneficios.

DECIMO SEPTIMO: Que considerar el monto que ha recibido la demandante por la ley de reparación 20.405, no significa en modo alguno descartar que todo daño deba ser íntegramente reparado. Citando al profesor Llamas Pombo “*difícil es ponderar la correcta valoración del sufrimiento, la pena, angustia, las vivencias desagradables e incluso el trauma psíquico, más aún traducir a una categoría diferente la de la reparación económica de los daños morales y ello queda en definitiva a la prudencia de los tribunales, dentro de los límites de las pretensiones resarcitivas producidas en la causa*” (Eugenio Llamas Pombo. “Las formas de prevenir y reparar el daño”. Wolters Kluwer, España 2020, pág.203.)

Por su parte, en la doctrina nacional, la profesora Domínguez Hidalgo refiere que la forma predilecta y más eficiente de tutela personal es la acción indemnizatoria. En la especie, la *acción de responsabilidad civil alcanza esa eficiencia porque es la única acción civil que se funda precisamente solo en la condición de persona. Siguiendo a López Jacoste, la responsabilidad civil se*



Foja: 1

ha constituido en una garantía genérica de plenitud personal (Carmen Domínguez Hidalgo. “El Principio de reparación integral en sus contornos actuales”, Thomson Reuters, año 2019, pág. 87)

Conviene destacar que la Ley 19.992 en su mensaje destaca que “*la prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional del Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile*”. Eso hizo necesario la dictación de la ley en reconocimiento a aquellas víctimas y, por ende el Estado debe “*entregar una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido*”.

Por otro lado, además, el principio de “reparación integral”, encuentra su reconocimiento en el artículo 2329 del Código Civil, el que dispone que todo daño que se pueda imputar a otra persona, debe ser reparado por ésta.

DECIMO OCTAVO: Que, en plena armonía con lo señalado precedentemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó su parecer en cuanto a la idoneidad de los mecanismos de reparación a nivel interno.

Al efecto, en el caso “Órdenes Guerra y Otros vs Chile”, 2018, La Corte IDH se refirió a la compatibilidad y complementariedad de las reparaciones de carácter administrativas con aquellas de naturaleza judicial -*párrafo 98.-*, y estimó que no existe impedimento u obstáculo para que pueda tomarse en cuenta, en una vía, lo otorgado en la otra. Reiterando la doctrina fijada en el caso “García Lucero vs Chile”, en orden a que los programas administrativos de reparación no podían obstaculizar el acceso a la reparación judicial. Agregando que ambos tipos de indemnizaciones podían legítimamente considerarse como diferentes o complementarias, pero lo que no podía ocurrir, es que los programas administrativos significaran el cierre de la vía judicial.

La misma línea argumentativa desarrolla el profesor Matías Meza-Lopehandía G., en su artículo “*La obligación de reparar por los delitos de lesa humanidad*” de mayo de 2019, concluyendo que los programas



Foja: 1

administrativos de reparación pueden o no ser considerados como parte de la reparación judicialmente establecida.

DECIMO NOVENO: En consecuencia, siendo perfectamente compatibles y complementarios los beneficios pecuniarios otorgados por las leyes de reparación con las indemnizaciones que otorga el poder judicial; ello no es óbice para que, por esta vía, se conceda un monto por todo aquél daño extrapatrimonial que se estima no ha sido íntegramente reparado.

Se cumple así con el principio de la “reparación integral del daño”, cuyo reconocimiento no sólo es aceptado en la doctrina, sino que también fundamenta los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando fuerza a los argumentos propios de la responsabilidad civil, cuya función central y primordial del derecho es la reparación integral.

Así también lo plantea el profesor Ramón Domínguez Águila, en su publicación sobre “*Los límites al principio de reparación integral*”, en el cual expresa que el principio de reparación integral es uno esencial en la responsabilidad civil en la actualidad. Su contenido impone que la medida de la reparación corresponda con la entidad del daño causado, dejando fuera cualquier otra consideración.

VIGESIMO: Que en base a todos los aspectos examinados precedentemente, se fijará la indemnización de perjuicios, por daño moral, que deberá pagar el Estado a la demandante María Elena Gálvez Valdenegro, en la suma única y total de **\$5.000.000**, la que se estima justa y equitativa, considerando que la actora es y ha sido beneficiaria de la Ley de reparación 20.405.

VIGESIMO PRIMERO: Que los montos indemnizatorios fijados deberán pagarse debidamente reajustados desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables desde que el Fisco incurra en mora, esto es, desde la notificación del cumplimiento incidental.



Foja: 1

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;

SE DECLARA:

- 1.- Que **se acoge** la excepción de intransmisibilidad del daño moral.
- 2.- Que **se rechaza** la demandada deducida por María Elena Gálvez Valdenegro, Luis Sergio y Ana María, ambos Fuenzalida Gálvez, en calidad de herederos de Sergio del Corazón de Jesús Fuenzalida Saavedra (Q.E.P.D).
- 3.- Que **se rechaza** la excepción de falta de legitimación activa de los demandantes, en cuanto comparecen por sí.
- 4.- Que **se rechazan** las excepciones de limitación de justicia transicional, de reparación satisfactiva y de prescripción.
- 5.- Que, **se acoge parcialmente** la demanda sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a los actores los siguientes montos: **(a)** a María Elena Gálvez Valdenegro, la suma única y total de \$5.000.000; y **(b)** a Luis Sergio y Ana María, ambos Fuenzalida Gálvez, la suma única y total de \$10.000.000, a cada uno; a título de daño moral por repercusión.
- 6.- Que los montos indemnizatorios señalados deberán pagarse, debidamente reajustada y con los intereses indicados en el considerando vigésimo primero.
- 7.- Que, **no se condena** en costas al Fisco de Chile, por tener la obligación de defender los intereses del Estado.

Rol C-6676-2023.-

Regístrese, notifíquese y elévese en consulta si no se apelare.

Wilson Eduardo Rodríguez Rodríguez, Juez Suplente, Primer Juzgado Civil de Santiago.-



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintinueve de Julio de dos mil veinticuatro**

